Miradas y propuestas populares frente a los cultivos de uso ilícito

Carolina Jiménez M.
Docente Universidad Nacional de Colombia

El pasado 3 de octubre finalizaron los foros nacional y regional sobre la Solución al problema de las drogas ilícitas convocados por la Mesa de Conversaciones en La Habana y coordinados metodológicamente por la Universidad Nacional de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas. Estos foros, al igual que los dos anteriores, contaron con una nutrida participación de organizaciones sociales populares de todo el país y representantes de los partidos políticos y académicos, entre otros actores sociales y políticos.

La centralidad que cobran los cultivos de uso ilícito y el fenómeno del narcotráfico para poner fin al conflicto armado, así como para avanzar en la construcción de una paz estable y duradera con justicia social, fue puesta de manifiesto por la diversidad de procesos sociales populares provenientes de diversos territorios del país, en especial, por aquellos más golpeados por este flagelo. A continuación recogemos de manera general las caracterizaciones y propuestas realizadas por estos sectores populares para encontrar salidas a dichos problemas.

El modelo de desarrollo rural y los cultivos de uso ilícito

Una de las tesis centrales planteadas por las organizaciones campesinas señala que el carácter elitista, violento, excluyente y latifundista de la estructura agraria del país se constituye en una de las principales limitantes para resolver el fenómeno de los cultivos de usos ilícitos en Colombia. En efecto, al decir de varios campesinos y campesinas

cultivadoras, la ausencia de una reforma agraria democrática en el país, así como la negativa de la institucionalidad estatal a impulsar un modelo de desarrollo rural soportado en la economía agrícola familiar, son factores que deben ser valorados a la hora de plantear salidas al problema de las drogas.

En este sentido, fueron ampliamente problematizadas las dificultades que tiene el campesinado tanto para un acceso legal democrático a la tierra, como para la formalización de sus títulos de propiedad en zonas de apertura de la frontera agrícola, en especial, en aquellos territorios donde las fincas de los colonos se superponen con figuras de protección legal como son las zonas de reserva forestal.

La ausencia de títulos de propiedad les impide a los campesinos acceder a los créditos de la banca comercial, así como a los escasos subsidios y programas de apoyo técnico brindados por el Estado, situación que limita y, en el peor de los casos, imposibilita a las familias campesinas a impulsar desarrollos productivos autónomos en sus parcelas. Aunada a esta problemática, se destacan las dificultades de acceso a mercados para la comercialización de la producción campesina, bien sea porque la infraestructua de transporte es bastante precaria o porque el Estado no garantiza precios de competitividad para sus productos. Esta situación es bastante ilustrativa en las zonas de colonización, territorios donde más se ha asentado el fenómeno del narcotráfico.

La precariedad y marginalidad que acompaña a la población rural en vastas regiones del país ha estado soportada en una actitud ambivalente del Estado colombiano, pues, por una parte, se niega a hacer presencia por la vía de una institucionalidad social que contribuya con equipamientos, políticas y programas que garanticen unas condiciones de vida digna a sus pobladores, y, por la otra, ha impulsado una presencia estatal a través de planes de militarización territorial, como los planes Colombia, Patriota y Espada de

http://es.globalvoicesonline.org/2012/08/19/graffitis-que-agitan-conciencias-en-tiempos-de-crisis

http://www.flickr.com/photos/juegasiempre/

http://www.flickr.com/photos/juegasiempre/

Honor, con los impactos humanitarios que de estos se han desprendido.

Así las cosas, en estas regiones se han desplegado unas configuraciones territoriales que expresan el carácter clasista y violento del régimen político colombiano, las cuales al encontrarse con una serie de dinámicas y actores que impulsan y soportan proyectos económicos ilegales, como son los de la producción y comercialización de narcóticos, terminan impulsando e involucrando de diversas maneras a los pobladores campesinos en los circuitos del negocio del narcotráfico.

En efecto, al decir de varios cultivadores, el circuito de la producción y la comercialización de los narcóticos se ha configurado en muchos de estos territorios en la única alternativa económica para el grueso de sus pobladores, pues no estamos hablando simplemente del que cultiva, sino del recolector de la hoja y del que transporta los insumos para el procesamiento, entre otros. Así las cosas, más que una actitud criminal o una apuesta por el dinero fácil, que –según la caracterización de los análisis más conservadores del fenómeno– acompañaría a los habitantes de las zonas de cultivo de coca, lo que encontramos son limitadas posibilidades de supervivencia de los campesinos y campesinas en estos territorios.

Tenemos, entonces, al decir de los sectores sociales populares que participaron de los foros, que en tanto no se resuelva el problema agrario en los territorios donde está asentado el negocio del narcotráfico, es muy dificil avanzar en soluciones reales a dicho fenómeno. Y por el contrario, se va a terminar profundizando un modelo rural de carácter especulativo y mafioso con control territorial por parte de actores armados.

El fracaso de la política de combate al narcotráfico

En el entendimiento amplio de la situación anteriormente descrita se configura claramente una de las explicaciones que permite entender el fracaso de la política de combate al narcotráfico que se viene desplegando en Colombia desde hace varias décadas, pero en especial desde el comienzo de la implementación del denominado Plan Colombia.

Entre las tesis planteadas por los sectores sociales populares se destacan aquellas vinculadas con el carácter autoritario y violento de la política y de criminalización del campesinado cultivador o *raspachín*; la incapacidad de resolver el control territorial que tienen algunos actores armados ilegales en zonas de cultivo y producción de la pasta base; la articulación entre poder político y poder mafioso; combatir el fenómeno desde los circuitos de producción y comercialización sin lograr atacar las múltiples formas como el narcotráfico permea otras esferas de la dimensión económica, política y social; el desconocimiento del carácter cultural del cultivo de hoja de coca en algunas comunidades, así como su posibilidad de soportar proyectos productivo alternativos.

Para buena parte de los sectores sociales, la política antinarcóticos no ha podido materializar y hacer efectivas las metas propuestas, debido a que no ha logrado impulsar programas de desarrollo realmente alternativos y concertados en las zonas de cultivos de uso ilícito. Por el contrario, la lucha contra las drogas ha asumido una estrategia punitiva y de criminalización contra el cultivador y recolector, asumiéndolo como narcotraficante, sin establecer una frontera clara entre éstos y los verdaderos dueños del negocio. De ahí la exigencia de los campesinos, indígenas y afrodescendientes para que se reconozca su condición como sujetos de derechos y se les diferencie de los mafiosos. Esta situación llevaría necesariamente a una descriminalización por parte del Estado del campesino, el indio o el negro que siembra coca, porque no tiene otras opciones de supervivencia en sus territorios.

El carácter punitivo y autoritario que acompaña la política antinarcóticos también se expresa en la negativa de las autoridades a impulsar programas de sustitución de cultivos de uso ilícito de manera gradual y concertada con las comunidades. La política se ha soportado en una agresiva estrategia de fumigaciones con glisfosato o de erradicación forzada, que, por una parte, han afectado los cultivos de pancoger y la soberanía alimentaria de las comunidades, así como sus condiciones de vida y salud, al contaminar las fuentes hídricas, y, por la otra, no han presentado alternativas reales para la sustitución. Aquí son bastante problemáticos los programas de siembra de monocultivos que se presentaron

como alternativos a las comunidades: el caso de un tipo de caucho de corte industrial impulsado por la USAID en el departamento del Caquetá es ilustrativo de la cuestión.

http://www.flickr.com/photos/juegasiempre/

Aunadas a estas características que más que impulsar una disminución del área sembrada, lo que ha estimulado es un desplazamiento de cultivos hacia otras regiones del país, los campesinoas y campesinas vinculados con los cultivos de uso ilícito señalan que la política no ha logrado atacar de manera real las estructuras criminales, especialmente las paramilitares que controlan el negocio, y que, por el contrario, muchas de ellas están afianzadas y son la autoridad en sus territorios. Esta misma situación se presenta frente a la incapacidad de resolver la simbiosis entre poder político y poder mafioso en el país.

De igual manera y siguiendo a Vargas podemos señalar que

> *Esta estrategia ha contribuido finalmente a incrementar el traumático desplazamiento forzoso, creando condiciones favorables para la expansión de los modelos productivos basados en la concentración de la tierra, afianzando los proyectos agroindustriales que crecen en la medida en que se debilitan los territorios colectivos y las zonas donde aún existe la pequeña y mediana propiedad*[1].

Así las cosas, son múltiples y diversos los desafíos a los que se enfrenta el Estado colombiano para diseñar una nueva política antidrogas realmente integral y capaz de involucrar a las comunidades afectadas en el diseño y construcción de la misma. Las ponencias presentadas por los asistentes al Foro denotan que en tanto el Estado no avance en la resolución del problema agrario en el país y que éste no se abra a construcciones participativas con los hombres y mujeres que habitan estos territorios, esta política está destinada a reproducir las condiciones de su fracaso.

1 Ricardo Vargas, "Las drogas como economía de guerra y el proceso de paz en Colombia: dilemas y desafíos". *Informe sobre políticas de drogas* No. 41, septiembre de 2013

Las propuestas sociales populares

Ante la complejidad de la situación descrita y en el marco de las apuestas territoriales que tienen las comunidades campesinas, indígenas y afrodescedientes, surgieron una serie de propuestas que, *grosso modo*, intentaremos recoger a continuación:

- *Resolver el problema del banco de tierras y avanzar en una ley de tierras que permita su democratización*. El acceso formal a la tierra por parte del pequeño campesino, así como de las comunidades indígenas y afrodescendientes, se constituye en un requisito fundamental a la hora de avanzar en el desmonte de las estructuras del narcotráfico en las zonas de colonización. El acceso y la formalización deben estar acompañados de planes de estímulo financiero por parte del Estado y de programas de desarrollo técnico.

- *Precios justos y sustentables e infraestructura para la comercialización*. La sustitución de los cultivos de uso ilícito pasa por el estímulo y condiciones de competitividad de la producción agrícola campesina. Por tal razón, las organizaciones sociales populares hicieron explícito que en tanto no tuvieran acceso a unos mercados de comercialización justos no se podía avanzar de manera decidida en la resolución del problema.

- *Reformulación integral de la política antidrogas*. Ante todos los fracasos descritos urge una transformación de la política de combate contra los cultivos de uso ilícito. Entre los elementos a tener en cuenta en este ejercicio, se desatacó la necesidad de un nuevo diseño institucional que haga posible la ejecución de programas y planes de trabajo realmente alternativos y concertados con las comunidades.

> Una de las tesis centrales planteadas por las organizaciones campesinas señala que el carácter elitista, violento, excluyente y latifundista de la estructura agraria del país se constituye en una de las principales limitantes para resolver el fenómeno de los cultivos de usos ilícitos en Colombia.

- *Reparación a las comunidades víctimas de una política antinarcóticos violenta*. Para las organizaciones sociales las afectaciones de la que han sido objeto en el marco de la implementación de la estrategia antinarcóticos deben ser reparadas moral y económicamente. Entre las principales afectaciones se destacan: desplazamiento forzado, daño de las cosechas de productos agrícolas por el glisfosato usado en las asperciones, enfermedades respiratorias y cutáneas de las poblaciones en zonas de fumigaciones, deterioro de los componentes nutritivos de las tierras objetos de aspersión y erradicación forzada.

- *Economías propias como alternativas a las ilícitas*. Es necesario que el Estado reconozca y genere espacios de posibilidad para que las comunidades ordenen sus territorios de acuerdo con sus horizontes de sentido. Por tal razón, se debe abandonar la imposición de proyectos productivos ajustados a la estrategia agroindustrial. También se destaca la necesidad de recomponer los usos tradicionales de la coca.

- *Constitución de Zonas de Reserva Campesina*. La figura de las ZRC reconocida por la ley 160 de 1994 es quizá uno de las propuestas que más ha convocado a los procesos organizativos. La zona se reconoce como una posibilidad de impulsar desarrollos territoriales alternativos que respondan al sentir y los proyectos sociales que tienen las comunidades en sus territorios.

Así las cosas, tenemos que el problema es bastante complejo y exige ser abordado de cara al país y, en especial, involucrando a los actores populares presentes en los territorios. Todas las alternativas propuestas por las organizaciones sociales para abordar el problema ponen de presente que no es una cuestión simplemente de sustitución y proyectos aternativos, sino que implica una discusión sobre la manera como se planea ordenar productivamente los territorios.

* * *

Urge un llamado a la sensatez a las directivas de la Universidad Nacional que están dejando caer a pedazos nuestra alma mater. Los recientes sucesos acaecidos en la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas son tan solo una de las dramáticas expresiones de la grave crisis que vive la educación superior en Colombia.

http://www.flickr.com/photos/juegasiempre/